

18^{va.} Convención

Federación de Trabajadores de Puerto Rico AFL-CIO

Contra los despidos de empleados públicos y privados.

En defensa de la riqueza de nuestro pueblo.

Contra la privatización y la represión.

En defensa de los derechos de la clase trabajadora puertorriqueña.



Sábado, 26 de septiembre 2009 - 8:00 A.M.
Centro de Convenciones ILA
San Juan, Puerto Rico

Unión Obrera

Publicación de la Federación de Trabajadores de Puerto Rico (FTPR-AFL-CIO)
San Juan, Puerto Rico - Septiembre de 2009

Crece repudio a política antiobrera del gobierno

Cada vez sectores más amplios de nuestro pueblo son víctima de la política antiobrera puesta en práctica por el actual gobierno de Luis Fortuño desde que inició su gestión en enero pasado. Así también, cada vez es mayor el repudio a esa política, a los despidos de empleados, al uso de la fuerza para acallar la protesta popular y a la entrega de la riqueza y los bienes del pueblo a los intereses privados.

No obstante, el Gobierno insiste en adelantar sus planes de privatizar servicios, dismantelar agencias y despedir a muchos otros miles de empleados públicos, sin importarle las graves consecuencias sociales y emocionales que empeoran de día a día la calidad de vida de nuestra gente trabajadora.

Si el repudio a la política de entrega no se traduce en

movilizaciones masivas frecuentes se debe, más que nada, al terror en que viven los empleados públicos y muchos de la empresa privada a ser despedidos sin contemplación alguna.

“Ahí está precisamente el reto del movimiento sindical organizado, en hacer entender a los trabajadores y trabajadoras que el terror no nos puede paralizar porque entonces los patronos público y privados nos pasarán por encima”, expresó José Rodríguez Báez, Presidente de la Federación de Trabajadores de Puerto Rico (FTPR-AFL-CIO).

La expresión masiva más contundente ocurrida hasta el presente fue la Gran Asamblea de Pueblo, efectuada el 5 de

—Continúa en página 2—



La manifestación más vigorosa de repudio hasta ahora ha sido la gran Asamblea de Pueblo del pasado 5 de junio.

junio pasado, en cuya organización y coordinación la FTPR tuvo un papel destacado. Desde entonces, varios sindicatos han convocado con éxito manifestaciones de repudio a la privatización y los despidos, y lo mismo han hecho las centrales sindicales y otros organismos unitarios, como la Coalición Sindical y la entidad Todo Puerto Rico Por Puerto Rico.

“Se debe destacar que las centrales, los sindicatos y otras entidades unitarias no han cesado de buscar terreno común para encauzar la protesta y la indignación de nuestros empleados públicos y trabajadores en general, y que se han hecho avances en esta dirección”, señaló Rodríguez Báez.

El Gobierno, por su parte, arrecia con nuevas medidas legislativas la política neoliberal que tan nefasta ha resultado en otros países, incluido Estados Unidos. Están en su agenda cerca de 20,000 despidos más, enmendar la Ley de Cierre

para perjudicar a la clase trabajadora; eliminar agencias, consolidar funciones en una agencia o entre agencias; eliminar los trámites de permisos que hasta ahora frenan un poco la voracidad de los llamados desarrolladores facilitándoles la destrucción de nuestro ambiente; y enmendar o eliminar importantes disposiciones de las leyes laborales.

“Este Gobierno no se detendrá porque está decidido a ser gobierno para uno pocos, para los ricos y acaudalados. Nuestros trabajadores y trabajadoras tampoco podrán detenerse en la lucha por defender sus derechos y conquistas, y por defender el derecho básico a trabajar para ganarnos honradamente la vida y mantener a nuestras familias. La ofensiva gubernamental y patronal hay que enfrentarla con una ofensiva mayor y más contundente por parte de nuestra clase trabajadora”, concluyó el Presidente de la FTPR.



Apenas habían transcurrido seis meses desde la toma de posesión del nuevo Gobierno, cuando ya esta enorme multitud rechazaba con firmeza las políticas de privatización y despidos implantadas desde Capitolio y Fortaleza.

Los tres pilares antiobreros del actual Gobierno

La ofensiva antiobrera del actual gobierno se monta, hasta ahora, en tres pilares: La Ley 7, las Alianzas Público Privadas y la propuesta Reorganización y Modernización de la Rama Ejecutiva. Están en remojo las enmiendas a la Ley de Cierre y la aniquilación de las agencias que reglamentan permisos y que se supone protejan nuestro ambiente.

Con la Ley 7 el Gobierno despidió ya cerca de diez mil empleados públicos y anuncia que botará otros veinte mil, porque supuestamente no han podido recaudar los dineros para acabar el déficit. Además, mediante esta Ley 7 el Gobierno despojó a los empleados públicos de las conquistas económicas negociadas mediante convenio colectivo.

La mentira de que eran empleados sobrantes quedó demostrada en el Departamento de Educación, donde botaron conserjes y luego reclutaron otros empleados para ocupar las plazas de los despedidos.

Con las Alianzas Público Privadas el Gobierno allana el terreno para que los servicios públicos que se salven del huracán de la Ley 7 pasen a manos privadas. Por esa vía, está probado que los servicios empeorarán. Basta recordar lo que pasó con el servicio luego que vendieron la Compañía Telefónica.

La Ley de Cierre no la han enmendado todavía porque no

se han puesto de acuerdo en cómo complacer mejor a los patronos y dueños de las megatiendas. Cuando los legisladores lleguen a un acuerdo será seguramente perjudicial a los intereses y derechos de los trabajadores y trabajadoras.

La Legislatura ahora está considerando una Reorganización y Modernización de la Rama Ejecutiva. El propósito es eliminar agencias y consolidar funciones. Por ambos rumbos se llega al mismo resultado: habrá despidos en las agencias eliminadas o consolidadas.

En ese Proyecto de Ley de Reorganización se dice que los derechos de los empleados quedarán según los contempla la Ley 7, que es la ley que arrebató conquistas y derechos a los unionados del sector público.

Otros trabajadores sin empleo

Otros patronos públicos y privados han decretado despidos injustificados. En WIPR, en la Autoridad de Edificios Públicos, en crasa violación de los convenios colectivos, los jercas patronales han despedido trabajadores. Los despidos fulminantes en *El Vocero* y el calvario que han vivido otros trabajadores de las comunicaciones confirman que el Gobierno ha contagiado a los patronos privados y éstos se han unidos de buen gusto en una ofensiva antiobrera feroz.



La incertidumbre como norma de gobierno

El actual Gobierno utiliza la incertidumbre como norma y táctica para inmovilizar a sus empleados. Los ejemplos sobran. Un día un funcionario dice que habrá más despidos, al otro día un secretario del Ejecutivo desmiente al funcionario. Pasa un par de días y se repite la historia. “Los despidos son inminentes”, dice uno. “Todavía no tengo información sobre despidos inminentes”, dice, sonriente, el gobernador Fortuño.

Mientras esto ocurre, los empleados viven en continuo estrés, en continua zozobra, temiendo que hoy o mañana les digan: “Hasta hoy trabajaste en el Gobierno”. Así, de canto, cercena el Gobierno las esperanzas y los derechos de miles de padres y madres de familia, o los mantiene al filo de una navaja, en perenne inseguridad.

En algún momento el Gobernador prometió que su gobierno actuaría con sensibilidad. “Me aseguraré que actuemos con responsabilidad y sensibilidad”, fueron sus palabras cuando anunció que el déficit le exigía despedir empleados. ¿Cómo es sensible un Gobierno que un día dice una cosa y al otro día dice lo contrario? La extraordinaria sensibilidad de este Gobierno la han expresado dos individuos: Jaime González Goenaga y José Cheo Madera, quienes han insultado sin sonrojarse a los vecinos de Ceiba. Al primero, Fortuño diz que lo sacó de cualquier cosa que tenga que ver con el desarrollo de la antigua base Roosevelt Road. Al segundo, el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, le ríe las gracias y lo mantiene como asesor.

Los trabajadores en general, y los empleados públicos en particular, deben reafirmarse en su derecho a ganarse honradamente el sustento de sus familias. Y deben mantenerse organizados y rechazar la incertidumbre con la que el Gobierno y algunos patronos privados pretenden paralizarlos para pasarles una aplanadora antiobrera que los despoje de toda conquista y de todo derecho.



FTPR apoya reclamo de paz estudiantil

La Federación de Trabajadores de Puerto Rico (FTPR-AFL-CIO) apoya sin reserva el reclamo de paz que hacen los estudiantes en Río Piedras y el repudio a la violencia que contra ellos han ejercido en estos días la Policía y la Guardia Municipal de San Juan, expresó hoy José Rodríguez Báez, presidente de dicha central obrera.

“La conducta agresiva de la Fuerza de Choque y los guardias municipales no tiene justificación ninguna. No puede ser que cualquier situación que requiera diálogo y ecuanimidad las llamadas fuerzas del orden la enfrenten con macanazos, empujones y gases lacrimógenos”, agregó.

El dirigente sindical apuntó que cada vez con mayor frecuencia la Policía recurre a la fuerza excesiva para acallar cualquier reclamo de la ciudadanía.

“En julio pasado, cuando el periódico *El Vocero* despidió injustamente a 107 trabajadores, la movilización policíaca fue abrumadora y era evidente su disposición a callar a como diera lugar a los obreros justamente indignados. Luego vimos la Policía atropellando en Villas del Sol; la semana pasada hizo lo mismo en la Ave. Universidad de Río Piedras. O sea, estamos ante un patrón recurrente de provocación y uso excesivo de la autoridad de las macanas”, dijo.

“Exigimos que el Superintendente Figueroa Sancha instruya a sus subalternos que respeten los derechos de estudiantes, trabajadores y del pueblo en general, y que evite que estas agresiones generen situaciones que todos lamentaríamos. Lo mismo debe hacer el Alcalde de San Juan respecto a sus guardias”, concluyó el Presidente de la FTPR.

La UPAGRA exige cuentas al Secretario del Trabajo y Alcaldes Guaynabo y Carolina

La Unión de Periodistas, Artes Gráficas y Ramas Anexas (UPAGRA) continúa protestando y denunciando que el Secretario del Trabajo y los alcaldes de Carolina y Guaynabo han premiado con contratos que ya sobrepasan los cuatro millones de dólares al Presidente de *El Vocero*, Sr. Miguel W. Roca Barnet, luego que éste despidiera en julio pasado los trabajadores del Departamento de Circulación.

Mediante dichos contratos, el Sr. Roca Barnet recibe dineros públicos para subsidiar la nómina en varias empresas que ha creado a partir de abril pasado para hacer las tareas de los obreros que despidió en *El Vocero* y otras, ha denunciado el compañero Néstor Soto, presidente de la UPAGRA.

Al subvencionar seis nuevas empresas del Sr. Roca, el Secretario del Trabajo, Sr. Miguel Romero, premia al que creó desempleo y esquiva su deber ministerial de procurar el bienestar de los trabajadores de este país. Esta conducta del Secretario y los Alcaldes de Carolina y Guaynabo equivale a incentivar el desplazamiento y los despidos, ya que los patronos que desplazan y botan trabajadores saben que podrán contar con cuantiosas sumas en subsidios salariales para sus empresas satélites.

La UPAGRA ha dicho reiteradamente que esta situación constituye un esquema claro diseñado para favorecer al Sr.



Roca. “El Secretario del Trabajo y los Alcaldes de Guaynabo y Carolina deben detener de inmediato este desvío de fondos públicos hacia el Sr. Roca, causante de que hoy haya 107 familias desprovistas de medios para subsistir”, recalcó el Presidente de la Unión



Con justa indignación recibieron los empleados de circulación de *El Vocero* la sorpresiva noticia de que quedarían desempleados de la noche a la mañana (julio de 2009).

El pueblo contra los despidos y la privatización



Contra las arbitrariedades de Univisión.



Contra los abusos de El Vocero.



Miles, miles, miles reclamaron que cese el maltrato al pueblo.



El Concilio de Iglesias... junto al pueblo la Gran Asamblea Nacional.

